

EDITORIAL

Avance del crimen organizado en Chile

Recientes casos de alta connotación social ocurridos tanto en nuestra zona como a nivel país alertan sobre el acelerado avance del crimen organizado en Chile, situación que debe convertirse en una prioridad a analizar por las autoridades de todo nivel, pero también—por la gravedad de su impacto— debe convocar a representantes de la academia y el mundo privado.

En una columna publicada en las últimas horas por El Líbero, Jorge Jaraquemada, director ejecutivo de Fundación Jaime Guzmán, advierte que la reciente Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana mostró un alza de los delitos violentos y, sobre todo, un cambio cualitativo en su naturaleza: los homicidios ya no se explican por riñas o asaltos aislados, sino por ajustes de cuentas, sicariatos y enfrentamientos entre bandas. “El crimen organizado ha dejado de operar desde la periferia y se ha instalado en el corazón del país”, afirma.

Coincidente con este análisis, el abogado y coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo UNAB, Pablo Urquizar, publicó una columna en La Tercera donde planteó que el crecimiento de los delitos de secuestros y extorsión en la última década refleja una transformación preocupante del panorama delictual en el país. “Ambos delitos generan un impacto devastador sobre las víctimas y configuran un ecosistema criminal cada vez más

estructurado y transnacional”.

Desde la vereda de la Iglesia, recientemente, el cardenal Fernando Chomali Garib, arzobispo de Santiago, abordó esta situación, alertando que “el gran tema en Chile es el crimen organizado que hace de las suyas en vastos sectores de la población bajo la forma de extorsión, usura, tráfico de drogas y de personas y de tantos males que dañan a muchas personas inocentes y el tejido social”.

Y añadió que “a la luz de la realidad que nos aqueja, las actuales políticas públicas para enfrentar el crimen organizado, y todo lo que ello implica, son insuficientes. Ello genera en la población una sensación de indefensión que paraliza la vida de los chilenos y los cientos de miles de migrantes honestos y trabajadores”.

Estos profundos cambios en la dinámica de los delitos —cada vez más violentos— así como la vulneración de la integridad de instituciones importantes del país, como el Poder Judicial, las policías y Fuerzas Armadas, requieren una acción conjunta firme y categórica. Estos casos no pueden aceptarse ni considerarse parte de una supuesta “normalidad”, sino —muy por el contrario— ser investigados y sus responsables castigados con la máxima severidad. Ese es solo un primer paso en un tema que debe abordarse con seriedad y absoluta profundidad.